

LA PRIVATIZACION EN LOS SISTEMAS TELEMATICOS DE INFORMACION

Angela Serrano Ferigle*

Resumen: La introducción de los sistemas telemáticos ha supuesto una revolución en el acceso a la información. Al mismo tiempo, ha comportado una serie de consecuencias económicas y sociales menos conocidas, pero importantes. Este artículo identifica el estatus y procedencia de los productores/explotadores de las infraestructuras y los servicios de las bases de datos telemáticos, así como el de sus usuarios. Concluye que el control mayoritario de estos sistemas por parte de las compañías multinacionales no favorece la democratización del acceso a la información, sino que acentúa su privatización a nivel de empresa, de individuos y de países.

Palabras clave: Bases de datos, telemática, privatización de la información.

Abstract: The spread of the new information systems has meant a real revolution in access to information. At the same time, it has involved some significant effects in the socioeconomic field. This article identifies the status and origin of the databases producers and operators, as well as their users. The author infers that the control done by multinational companies does not help the democracy in information access, but increases its privatization at enterprises, individuals and countries levels.

Keywords: Databases, data transmission, privatization of information.

Introducción

Decir que la información juega un papel clave en el mundo actual es casi una obviedad. De ser un mero factor de soporte ha pasado a ser un elemento central en la toma de todo tipo de decisiones. Este cambio cualitativo ha sido posible gracias a los espectaculares avances en microelectrónica y disciplinas afines registrados en los últimos lustros: el microprocesador, la fibra óptica, aplicaciones como la radiodifusión directa por satélite (DBS) o la red digital de servicios integrados (ISDN) son algunos ejemplos. Sin embargo, no debemos pensar que los efectos de estas nuevas tecnologías deban ser por fuerza positivos. Dependerá del uso concreto que se haga de ellas el que realmente contribuyan al progreso de la comunidad de países. La transmisión de información de contenido económico, técnico o científico constituye un bien que es susceptible de generar importantes beneficios tanto a su productor, procesador y distribuidor, como a su receptor y usuario. Se ha convertido en un negocio en sí mismo. La tendencia actual es que en el acceso a esta información se reflejen las desigualdades de riqueza, poder y oportunidad, tanto entre personas y empresas como entre países.

* Dep. Adquisiciones Biblioteca Universidad Autónoma de Barcelona.
Recibido 18-2-92

Veamos cómo se manifiesta el proceso privatizador en los sistemas de información telemáticos a nivel de infraestructura y de contenidos.

La desregulación de las telecomunicaciones en los países occidentales

Una vez que los países occidentales han llegado al llamado «Estado del bienestar», el rol de éste como proveedor de servicios esenciales como la sanidad, la educación o las comunicaciones, ya no es tan necesario y se pone en cuestión. El déficit público que generan (los precios están subestimados en relación a los costes) y las cada vez mayores inversiones necesarias en nuevas tecnologías hacen que muchos gobiernos no puedan seguir soportando esta carga económica solos. A esto se añade la enorme presión ejercida por las grandes empresas que exigen, por una parte, mejores servicios y, por otra, hacerse con esta importante porción del mercado no explotado privadamente. Estas han sido las causas que han llevado a la liberalización de muchos servicios públicos, entre ellos las telecomunicaciones. Hasta hace pocos años este campo era considerado como «monopolio natural» de los estados, pero el estallido de las nuevas tecnologías y servicios, alejados ya del concepto de servicio social como es la telefonía, ha impulsado a la mayoría de gobiernos a dejar en manos privadas la investigación y explotación de los mismos. Así se ha llegado a la distinción jurídica entre servicios básicos —teléfono, telégrafo y télex—, que continúan regulados, y servicios de valor añadido (VAN) —correo y facturación electrónica (EDI), videotex, facsímil, teléfono móvil, acceso online a bases de datos, etc.— que se dejan a la libre competencia. Se liberaliza también el mercado de equipos.

USA ha sido el país pionero en el proceso de desregularización de las telecomunicaciones. Se inició en 1956 con una acción antitrust contra ATT —compañía que detentaba el monopolio privado en este campo— y se completó con la desmantelación («divestiture») de la misma en 1982.

Japón desregula sus telecomunicaciones en 1985, privatizando la NTT, liberalizando los servicios VAN y los equipos terminales.

En la Europa comunitaria las pautas de este proceso han estado fijadas en el Libro Verde de las Telecomunicaciones (1987), que, entre otras consignas, establece la liberalización de los equipos terminales, de los servicios VAN y la exclusividad, aunque revisable de forma restrictiva, por parte de los monopolios estatales de telecomunicaciones (PTT) sobre los servicios básicos. El grado de aplicación de estas pautas ha sido diverso. Desde la fuerte desregularización en UK, donde el gobierno conservador de Mrs. Thatcher privatizó British Telecom y le hizo perder el monopolio de la telefonía, hasta las de tipo medio como España, aunque recientemente Telefónica haya pasado mucho más claramente al lado de los liberalizadores.

España

Por la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) de 31/1987 de 18 de diciembre, se liberalizan los equipos terminales, los servicios VAN y se crea un

organismo regulador diferente al explotador de los propios servicios. Diversos expertos han puesto en duda el auténtico talante desregulador de la LOT, que tendrá que definirse a través de los reglamentos que la desarrollen. Hasta ahora han quedado liberalizadas las centralitas multilíneas, la telefonía móvil, los terminales secundarios y, desde el 1 de julio de 1991, también el primer teléfono. Sin embargo, el nuevo contrato firmado por el Estado con Telefónica de España a finales de dicho año, en el que sobresalen los mínimos de calidad que el primero exigirá de la segunda, parece indicar un reforzamiento del control estatal sobre el monopolio de la telefonía. Como clara concesión a las grandes empresas se puede interpretar la reducción a mediados de 1991 de las tarifas telefónicas intercontinentales, «sufragadas» por la subida en las tarifas locales e interurbanas. Un retroceso se produjo recientemente cuando Telefónica declaró «desierto» el concurso para ceder la telefonía móvil.

Mercado mundial de las telecomunicaciones

La finalidad de estas políticas llevadas a cabo por los países comunitarios era ni más ni menos que la iniciativa privada consiguiese el nivel de competitividad necesaria frente a los grandes, USA y Japón. Y en buena parte se ha conseguido. En 1990 el mayor operador del mundo fue NTT, con un negocio de 44.249 millones de dólares. El segundo lugar lo arrebató el alemán DBP Telekom, con 25.122 millones de dólares a ATT, que queda en tercer lugar con 25.084 millones. Telefónica pasa del decimonoveno al decimoquinto puesto en este sector. El gigante norteamericano continúa ocupando el lugar de cabeza como constructor de instalaciones de telecomunicaciones, con 12.201 millones de dólares, aunque seguido de cerca por los europeos Alcatel NV, Siemens y Ericsson, en el segundo, tercero y cuarto puestos, respectivamente. Sin embargo, 150.000 millones de los 350.000 que supuso el negocio mundial de los 50 primeros operadores en 1990, sigue estando en manos norteamericanas, lo que representa el 42,5 % del total. La tendencia del mercado de las telecomunicaciones apunta a la concentración empresarial (por ejemplo, los seis primeros constructores producen el 50 % del negocio mundial) (1). Los países carentes de compañías propias suficientemente fuertes ven copado su mercado por las transnacionales americanas y japonesas, y en menor medida, europeas. De hecho, la mayoría de «joint ventures» de empresas del Viejo Continente son realizadas con compañías norteamericanas, un 52 %, otro 30 % con japonesas y sólo el 18 % con empresas europeas.

La presencia extranjera en España, país deficitario tecnológicamente, es abrumadora. La mayor parte de inversiones en telecomunicaciones son llevadas a cabo por Telefónica de España junto a ATT. Contempla también «joint ventures» con transnacionales como Bull, IBM o Nixdorf. Con ATT firmó un acuerdo para la instalación en España de una planta de circuitos integrados (2). El sector de equipos está dominado por cinco empresas: Alcatel-Telettra, Ericsson, Fujitsu, ATT y Amper, que es la única española y que controla menos del 10 % del mercado.

El proyecto del primer satélite español de comunicaciones, Hispasat, ha supuesto para el Estado un desembolso de 56.000 millones de pesetas. El consorcio

que lo ha construido está formado mayoritariamente por empresas extranjeras y lo preside una compañía francesa, Matra. Una mayor participación española en un hipotético Hispasat II ha sido puesta en duda por el Director de Explotación de Hispasat, Pascual Menéndez (3). De hecho, el volumen de negocio de la industria espacial española sólo ha sido de 15.000 millones de pesetas en 1991.

La consecuencia más inmediata de la implantación de compañías de capital extranjero es la perpetuación de la dependencia tecnológica, cuando no el claro perjuicio a la industria nacional. En Canadá, durante los setenta primeros días de aplicación del FTA, tratado de libre comercio que institucionaliza el rol dominante de USA en América del Norte, fueron despedidos 1.705 trabajadores de diversas empresas de telecomunicaciones canadienses (4).

A pesar del empuje en el sector infraestructuras de los países comunitarios «fuertes» y algunos escandinavos, en cuanto a los servicios VAN, y a pesar de las mejoras registradas en ellos, el usuario sigue considerando como de mejor calidad los servicios ofrecidos por las compañías norteamericanas. Veamos ahora cómo uno de estos servicios, la transmisión de datos *online*, presenta también desequilibrios tanto en su producción como en su uso.

Productores, usuarios y beneficiarios de la transmisión de información online

Grandes productores de bancos de datos factuales son los organismos públicos internacionales, como la OCDE, la OMS o el World Bank. Estos datos son explotados por empresas privadas dedicadas a su proceso y distribución. Se estima que los gobiernos dedican 10 millones de dólares anuales a recuperar información generada originariamente por ellos a través de estas empresas. Las referencias bibliográficas comercializadas que forman las bases de datos científicas provienen de investigaciones financiadas a menudo con dinero público. Si bien existen bases de datos públicas a coste reducido o gratis (sólo pagando la comunicación) como en España los PIC o, para un selecto número de instituciones públicas, las bases de datos documentales de las Comunidades Europeas del distribuidor ECHO, el grueso del negocio de producción y distribución está en manos privadas y concretamente de compañías norteamericanas. Por otra parte, y como ejemplo de la concentración geográfico-cultural de este negocio, cabe decir que el 77 % de los bancos de datos mundiales están en inglés (5). Estas son las estadísticas:

- USA posee cinco veces más bancos de datos en texto integral que la CEE.
- USA posee seis veces más bancos de datos de estadísticas que la CEE.
- La CEE produce diez veces menos bases de datos online que USA.

A mediados de los años ochenta, el 70 % de los vendedores de bases de datos eran norteamericanos. Y prácticamente todo este volumen de información en venta es manejado por empresas transnacionales o sus subsidiarias como Chase Econometrics (subsidiario del Chase Manhattan Bank), Data Resources Inc. o DIALOG, el distribuidor más importante del mundo que fue creado por la Lockheed (6) y que en 1990 fue adquirido por Knight Ridder. Hemos de considerar asimismo el volumen de negocio generado por las compañías que, alquilando líneas de telecomunicaciones, ofrecen entre otros servicios VAN el acceso a bases

de datos *online* de forma especializada. Este volumen, de 750 millones de dólares en 1990, y en continuo crecimiento, está dominado por dos corporaciones, Tymnet (32 %), ahora subsidiaria de la privatizada British Telecom, y SprintNet (39 %), de la transnacional norteamericana GTE Sprint.

Los mayores beneficiarios del acceso a bases de datos remotas son también las grandes empresas transnacionales. Por definición, su funcionamiento exige una conexión entre filiales que permita la transmisión rápida y segura de información interna y externa. Ejemplos de grandes redes de información interna son la SITA, que conecta 170 países y 28.000 terminales de empresas de transporte aéreo, o la SWIFT, que une 700 bancos de 26 países.

En cuanto a información externa, son de extrema utilidad económica los datos referentes a nuevas tecnologías, patentes, situación de la industria, la banca, recursos naturales de otros países, etc. Estos datos, cuando por su gran interés no son monopolizados íntegramente por los gobiernos o transnacionales de los países avanzados para su propio uso, son puestos a la venta a través de distribuidores privados. De hecho, cuanto mayor es su posible uso económico, mayor es la tarifa de conexión a una base de datos *online*. Un ejemplo concreto de la progresiva mercantilización de la información es el incremento de bases de datos económicas en DIALOG, que representan ya un 30 % del total.

Las consecuencias de la materialización de estas tendencias privatizadoras son de índole diversa. La primera, y que se refiere al propio concepto de información, es que ésta deja de ser un bien al alcance de todos para ser un bien sujeto a las leyes del mercado. De ello se deriva que sólo los países, empresas y sujetos con suficiente capacidad económica (y técnica) tendrán acceso a este bien, cuyo uso redundará en el incremento de su poder. Los países carentes de dicha capacidad se limitarán a mantener relaciones de dependencia con los primeros, convirtiéndose en exportadores de datos en bruto e importadores de datos procesados. Las empresas que no puedan permitirse el acceso a estos nuevos sistemas de información verán limitadas seriamente sus expectativas de crecimiento y, en algún caso, de supervivencia. Los investigadores que no tengan acceso, por circunstancias diversas, a centros de teledocumentación gratuitos o mínimamente subvencionados (como afortunadamente tenemos en España) se verán comparativamente agravados con los que sí lo tengan. A nivel puramente documental, hay el peligro claro de que sólo se conviertan en información los datos vendibles a buen precio, y que se produzca un «silencio documental» sobre datos de menor interés comercial, como pueden ser los humanísticos. En el futuro quizás nos lamentemos de esta pérdida de información.

Las estadísticas sobre bases de datos en España son bastante elocuentes:

- La liberalización de los servicios VAN no ha recibido aún respuesta desde el mercado interior. En cambio en nuestro país funcionan ya nodos de telecomunicación instalados por British Telecom (Global Network Services), Sprintnet, etc., así como por los distribuidores Data-Star, Dialog, Dun & Bradstreet, etc.
- Salvo Spritel, no existe un *host-gateway* que uniformice el acceso a los distribuidores españoles. Existen intentos de Easynet (USA) e Infotap (Luxemburgo) de instalarse en España.

- Los productores de bases de datos existentes en España son sus propios distribuidores, usando generalmente software importado.
- 2322,8 horas de conexión a bases de datos españolas y 9679,3 a bases de datos extranjeras; 33 bases de datos extranjeras representan el 90 % del consumo de información *online* (7).

Conclusiones

Una vez identificados los posibles efectos de la privatización de los nuevos sistemas de información, tanto en su infraestructura —telecomunicaciones— como en su contenido —datos—, es el momento de establecer políticas de evaluación tecnológica serias y actuar en consecuencia. Si dejamos que la información, un bien cada vez más necesario, se convierta en un producto de acceso restringido, caro y difícil, las repercusiones a largo plazo podrían ser indeseables.

Notas

1. Les 100 premiers. *Télécom Magazine*, n.º 10, nov.-dec. 1991, 45-74.
2. LOPEZ GARRIDO, D. *La crisis de las telecomunicaciones*. Madrid, 1989, 112-114.
3. Entrevista a Pascual Menéndez. *Fundesco*. n.º diciembre 1991, p. 6.
4. MOSCO, V. El nuevo orden transnacional de la información. *Telos.*, 1991, v. 23, marzo-mayo, p. 43.
5. TURNER, W.; LE COADIC, Y. Le marché de l'information électronique en Grande Bretagne et en France. *Documentaliste*, 1991, 28, (2), mars-avril, p. 71.
6. HAMELINK, C. J. *Transnational Data flow in the information age*, Amsterdam, 1984, p. 50.
7. CIDC. *Estadísticas del uso de bases de datos online en España 1987*. Barcelona, 1988. En las horas de conexión a bases de datos españolas no se cuentan las conexiones a los PIC (19.431 horas), cuya base de datos del ISBN recoge el 80 % de las consultas.